Editorial

Esta nueva edición contribuye a la actual crítica y condiciones de posibilidad del acuerdo de paz y posconflicto en Colombia, momento que exige la formación de opinión para la toma de posturas frente a las decisiones que este acontecimiento sociopolítico llevará a efectos en el devenir nacional. En este propósito académico, se reunió un grupo de doce artículos que son resultados de investigaciones de las áreas del derecho, ciencias políticas y humanidades.

Iniciamos con el trabajo de los investigadores de Venezuela, Acosta-Herrera, Romero-Hurtado, Rodríguez-Echeverría, quienes analizaron los antecedentes históricos y las implicaciones éticas y jurídicas del Estado colombiano frente a la masacre ocurrida en este municipio del departamento del Meta, entre el 12 y 20 de julio de 1997, perpetrada por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. El resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que implicaron al gobierno nacional por la colaboración y aquiescencia de agentes del Estado, que permitieron el secuestro, tortura y asesinato a por lo menos 49 civiles, sienta un precedente sobre la obligación de establecer la seguridad y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones en regiones desatendidas por las autoridades, vulnerabilidad que no se ha logrado superar en muchas zonas del país a causa del conflicto armado.

El segundo artículo, del investigador López-Agudelo, muestra los imaginarios sobre el conflicto armado recreados en las tramas y personajes de la literatura antioqueña del siglo XX, en particular en las obras de Manuel Mejía Vallejo, como son *Al pie de la ciudad*

(1958); *Las muertes ajenas* (1979); *El día señalado* (1986), las cuales, según el autor, expresan la memoria de una generación que fue oyente, escucha e intérprete de las voces de la violencia en nuestro país.

El tercer artículo es una contribución del investigador Rodríguez-González, quien más allá de mostrar los antecedentes políticos y sociales del conflicto armado en el país, analiza los desafíos que exige la reforma del aparato estatal, para garantizar los tres puntos de participación política, tales como: apertura democrática para construir la paz, solución al problema de las drogas ilícitas y reforma rural integral.

El cuarto artículo, presentado por las investigadoras Ramírez-Cardona, Veloza-Morales y López-Pereira, aporta a la crítica multidisciplinaria imprescindible para el estudio de las alternativas de protección del derecho a la salud en las regiones desatendidas por la presencia de la confrontación armada, las cuales demandan que el Estado preste un servicio diferencial e integral, que incluya programas y tratamientos para armonizar la salud mental de las víctimas del conflicto.

El quinto artículo, es un aporte de los investigadores Restrepo-Jiménez, Muñoz-Hernández y Royo-Galeano, quienes se enfocaron en cuatro áreas cruciales para las condiciones actuales del posacuerdo, tales como: la población víctima del conflicto, la salud, la educación y la vivienda, mediante un "Modelo para el monitoreo y evaluación del acceso a los servicios de salud de las víctimas del conflicto armado, en el escenario del posconflicto", así como el "Desarrollo de aplicaciones *Kinect* para discapacitados y población postconflicto basado en Tic", proyectos que contribuyen a la capacidad tecnocientífica, social y administrativa que requiere la reparación integral de las poblaciones vulnerables.

El sexto artículo, propuesto por el investigador Dávila-Londoño, es un balance clave para entender la producción de conocimiento

en torno a tres categorías relacionadas mutuamente como son el conflicto, la violencia y el crimen en la ciudad de Medellín; principalmente estudios de organizaciones no gubernamentales, seguidos de los publicados por universidades y el sector gubernamental, los cuales muestran que, en los últimos 7 años, desde 2009, a medida que se incrementó el estudio de esta problemática, se presentó una reducción considerable de homicidios y hechos violentos en la ciudad.

El séptimo artículo, presentado por Higgins-Lubo y Solano-Wiswell, investigadoras en formación, es un aporte para la comprensión conceptual y de realidades históricas, en las que se reflejaron ideales de construcción utópica de la nación, así como la correspondencia conceptual de las ideas y la práctica de la transformación social producida por el conflicto y sus impactos internacionales. Se destaca la importancia del análisis del poder político en los escenarios donde interactúan las organizaciones sociales para entender el proceso de cambio social.

El octavo artículo es un aporte de los investigadores Giraldo-Díaz, Nieto-Gómez y Cabrera-Otálora, quienes analizan el cumplimiento de las tres condiciones que rigen a un Estado Social de Derecho, tales como: eficacia, legitimidad y legalidad, en relación con el desarrollo rural y la territorialidad en el país; ámbitos que, según los autores, exigen una eficaz democratización de la economía agraria, que fortalezca proyectos productivos regionales abiertos a los mercados de la frontera agrícola, donde es mayor la disputa por el control territorial por parte de los grupos armados y, por tanto, la urgente presencia del Estado para garantizar la seguridad nacional, interior, pública y civil en los territorios fronterizos.

El noveno artículo, presentado por las investigadoras en formación Yancy-Caballero y Uribe-Lambis, quienes incluyen al Eln en el actual escenario de los procesos de paz, la segunda guerrilla con mayor presencia en el país, y las condiciones actuales para el inicio de las negociaciones con el gobierno y su reconciliación con el país. Muestran los antecedentes históricos para comprender las

razones de su combate armado y la transición que daría lugar al “combate de ideas” mediante su participación en política.

El décimo artículo es una contribución de los investigadores Gómez-Rodríguez y Rojas-Velásquez, quienes analizan la política agraria en Colombia y el problema de la posesión de tierras y sus implicaciones en el acuerdo de paz para frenar el empoderamiento de actores ilegales que han despojado y desplazado a sus dueños legítimos, así como a la inequidad e injusticia social que el conflicto armado ocasiona en las poblaciones campesinas. Los autores destacan que la puesta en marcha de un posible acuerdo trae consigo un nuevo ordenamiento espacial de acuerdo a las particularidades resultantes del proceso, un reacomodamiento de las fuerzas políticas regionales y locales, la postulación de mecanismos de control y compromiso institucional con respecto al gasto público desde el orden central como local y las “competencias y soberanías de los diferentes niveles territoriales del Estado” (Castañeda, González y Mares, 2000).

El undécimo artículo, propuesto por Maldonado-Llanos y Sánchez-Rivas, investigadoras en formación, analizan las exigencias del Marco Jurídico para la Paz, basado en la justicia transicional, conforme a tres principios: justicia, reparación y no repetición. De esta manera, muestran los antecedentes de estas medidas judiciales y políticas en procesos de posguerra y sus alcances en las condiciones actuales para su implementación en Colombia.

El último artículo es un aporte del investigador en formación Gutiérrez-Rodríguez, sobre los neologismos de “narco-ideología” y “narco-terrorismo”, los cuales, según el autor, han financiado y justificado el accionar de las guerrillas en Colombia. Es un texto que intenta un comentario crítico al proceso de paz y, por tanto, sugiere una pluralidad abierta al debate, en la que todas las razones pueden ser expresadas y dialogadas.

Con esta edición damos por cumplida una apuesta por pensar el devenir de los diálogos de paz en el país, compromiso que la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas, asumió para contribuir a la formación del criterio de una ciudadanía más informada y propositiva para la superación de todas las formas de violencia e inequidades que afronta el país.

Rafael Alejandro Betancourt Durango